



SUJETO CIBERNÉTICO Y PERSONALIDAD ELECTRÓNICA: COMPATIBILIDAD CON EL REGLAMENTO EUROPEO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (AI ACT)

Pablo Rafael Banchio¹

*VIII Congresso Internacional de Ciência Jurídica y V Congresso Internacional de
Direito, Sociedade e Tecnologias*

Escola de Direito das Faculdades Londrina, Brasil, 16 de diciembre de 2024

Quisiera agradecer, en primer lugar, la invitación a participar en el *VIII Congresso Internacional de Ciência Jurídica* y en el *V Congresso Internacional de Direito, Sociedade e Tecnologias*. Es un verdadero honor compartir este espacio de reflexión académica.

La intervención que propongo parte de una pregunta central: ¿Cómo puede comprenderse, desde una perspectiva jurídico-teórica, la compatibilidad entre el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial -el llamado AI Act- y la teoría del cbersujeto? Mi tesis es que el AI Act adopta, de manera implícita pero consistente, un modelo regulatorio híbrido, y que este modelo resulta plenamente compatible con la noción de cbersujeto que he venido desarrollando en trabajos recientes y en mis intervenciones en el *Mestrado Profissional em Direito Sociedade e Tecnologias* de esta casa de estudios.

Desde una perspectiva jurídico-teórica, la compatibilidad entre el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (*AI Act*) y la teoría del cbersujeto permite comprender por qué la regulación europea adopta un modelo que puede ser caracterizado como híbrido. En efecto, el cbersujeto no es concebido como un nuevo sujeto de Derecho ni como un mero objeto técnico, sino como una entidad funcional jurídicamente relevante, capaz de intervenir en procesos decisionales y de producir efectos significativos sobre las personas y los derechos fundamentales, sin que ello justifique la atribución de personalidad jurídica propia (Banchio, 2024a; 2024b). Esta caracterización rompe con la dicotomía

¹ Doctor en Derecho Privado y Posdoctor en Principios Fundamentales y Derechos Humanos (Argentina). Posdoctor cum laude en Nuevas Tecnologías y Derecho (Italia). Posdoctor en Globalización y Derechos Humanos (Italia). Magíster en Derecho Empresario (UA). Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas (UBA). Profesor del Máster en Digitalización y Derechos Humanos, Universidad Euro-Mediterránea (EMUNI), Director del Posdoctorado en Derechos Humanos e Inteligencia Artificial (Italia) (<https://www.universitavirtuale.eu/post-dottorato>). Coordinador Académico del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad Interamericana en Ciencias Sociales (FICS) (<https://fics.edu.py/ciencias-juridicas/>).



clásica sujeto/objeto sobre la que se ha estructurado históricamente la dogmática jurídica, obligando al Derecho a repensar sus mecanismos tradicionales de regulación.

El *AI Act* refleja esta misma lógica al abstenerse expresamente de reconocer personalidad jurídica a los sistemas de inteligencia artificial, al tiempo que los trata como sistemas capaces de generar riesgos relevantes para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales, especialmente en el caso de los sistemas de alto riesgo. En coherencia con ello, la regulación no se orienta a disciplinar una supuesta “conducta” autónoma del sistema, sino a gobernar los impactos y riesgos asociados a su diseño, desarrollo, puesta en funcionamiento y uso contextualizado. Este desplazamiento del foco regulatorio hacia los efectos producidos por los sistemas algorítmicos coincide plenamente con la teoría del cbersujeto, que propone una regulación centrada en los resultados normativamente relevantes y no en la ficción de una voluntad artificial jurídicamente imputable (Banchio, 2024b).

Como consecuencia de este enfoque, el *AI Act* articula un conjunto de obligaciones que operan de manera *ex ante*, durante el funcionamiento y *ex post*, a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial. La gestión de riesgos, la gobernanza de los datos, la documentación técnica, la supervisión humana significativa y el monitoreo posterior a la comercialización constituyen instrumentos jurídicos cuya eficacia depende necesariamente de requisitos técnicos y organizativos específicos. En este punto, el Derecho no abdica de su fuerza normativa, sino que se apoya en estándares técnicos verificables para hacer operativas sus exigencias, dando lugar a una integración estructural entre norma jurídica y técnica.

Este modelo se refuerza mediante un sistema de imputación distribuida de obligaciones y responsabilidades, en el que los sistemas de inteligencia artificial no son titulares de deberes jurídicos, sino que las cargas normativas se asignan a proveedores, desarrolladores, importadores, distribuidores y otras figuras relevantes en función de su rol en el ciclo de vida del sistema. Tal esquema coincide con la propuesta de Banchio, según la cual la responsabilidad jurídica frente a los efectos del cbersujeto debe recaer sobre los sujetos humanos e institucionales que participan en su diseño, implementación y control, evitando tanto la irresponsabilidad estructural como la atribución ficticia de responsabilidad a la tecnología misma (Banchio, 2024b).

Asimismo, el *AI Act* incorpora de manera explícita la protección de los derechos fundamentales como eje axiológico de la regulación, traduciendo principios como la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y la tutela



judicial efectiva en obligaciones jurídicas concretas. Este proceso de juridificación de principios éticos encuentra un fundamento teórico sólido en la noción de Algorética, que concibe la ética no como un conjunto de recomendaciones voluntarias o *soft law* externo, sino como un componente normativo internalizado en el diseño y funcionamiento de los sistemas algorítmicos (Banchio, 2024a; 2024c). De este modo, consideraciones éticas se convierten en requisitos técnicos exigibles, como la calidad de los datos, la mitigación de sesgos o la prohibición de determinados usos de la inteligencia artificial.

La exigencia de supervisión humana significativa constituye otro punto de convergencia relevante entre el *AI Act* y la teoría del cbersujeto. Lejos de tratarse de un principio meramente declarativo, la supervisión humana se configura como una obligación jurídica con dimensiones técnicas, organizativas y formativas, que exige la capacidad real de comprender el funcionamiento del sistema, intervenir en sus resultados y, en su caso, corregir o anular sus efectos. En este sentido, el control jurídico se ejerce a través de capacidades humanas técnicamente habilitadas, lo que refuerza el carácter híbrido del modelo regulatorio sin menoscabar la centralidad del Derecho (Banchio, 2024c).

Finalmente, tanto el *AI Act* como la teoría del cbersujeto evidencian un desplazamiento parcial de la aplicación del Derecho hacia infraestructuras regulatorias digitales, tales como registros, bases de datos, procedimientos de evaluación de la conformidad y sistemas de monitoreo continuo. Estas infraestructuras no sustituyen los mecanismos clásicos de control jurídico, sino que los complementan, permitiendo una gobernanza algorítmica anticipatoria y permanente. En este marco, la regulación híbrida no debe ser entendida como una dilución del Derecho en la técnica, sino como una juridificación de la técnica al servicio de la protección efectiva de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho en el contexto del constitucionalismo digital contemporáneo.

Concluyo, entonces, señalando que la teoría del cbersujeto ofrece un marco conceptual útil para comprender y fundamentar el enfoque europeo. Un enfoque que no personaliza a la inteligencia artificial, pero tampoco la reduce a un simple objeto, sino que la integra en el sistema jurídico como una realidad técnicamente activa y jurídicamente relevante. Muchas gracias.

CYBERNETIC SUBJECT AND ELECTRONIC PERSONALITY: COMPATIBILITY WITH THE EUROPEAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT (AI ACT)

I would like, first of all, to thank you for the invitation to participate in the VIII International Congress of Legal Science and the V International Congress on Law,



Society and Technologies. It is a genuine honour to share this space for academic reflection.

The contribution I propose starts from a central question: how can the compatibility between the European Regulation on Artificial Intelligence - the so-called AI Act - and the theory of the cybersubject be understood from a legal-theoretical perspective? My thesis is that the AI Act adopts, implicitly yet consistently, a hybrid regulatory model, and that this model is fully compatible with the notion of the cybersubject that I have been developing in recent works and in my contributions to the *Mestrado Profissional em Direito, Sociedade e Tecnologias* of this institution.

From a legal-theoretical perspective, the compatibility between the European Union Artificial Intelligence Act (AI Act) and the theory of the cybersubject provides a solid basis for understanding why EU artificial intelligence governance adopts what may be characterized as a hybrid regulatory model. The cybersubject is not conceived as a new legal subject nor as a mere technical object, but rather as a legally relevant functional entity capable of intervening in decision-making processes and producing significant effects on individuals and fundamental rights, without thereby justifying the attribution of legal personality (Banchio, 2024a; 2024b). This characterization disrupts the classical subject/object dichotomy that has historically structured legal dogmatics and compels the law to rethink its traditional regulatory instruments.

The AI Act reflects this same logic by expressly refraining from granting legal personality to artificial intelligence systems, while simultaneously he treats them as systems capable of generating risks to health, safety and fundamental rights, particularly in the case of high-risk AI systems. Accordingly, the regulatory framework is not oriented towards governing an autonomous “conduct” of the system, but rather towards the governance of the impacts and risks associated with the design, development, deployment and context-specific use of AI systems. This shift of the regulatory focus towards legally relevant effects, rather than towards a fictional attribution of autonomous agency, fully aligns with the cybersubject theory, which advocates for regulation centred on outcomes rather than on imputing artificial will or intent (Banchio, 2024b).

As a consequence of this approach, the AI Act establishes a set of obligations that operate *ex ante*, during operation and *ex post*, throughout the entire AI system lifecycle. Risk management systems, data governance requirements, technical documentation, meaningful human oversight and post-market monitoring constitute legal instruments whose effectiveness necessarily depends on specific technical and organizational requirements. In this context, the law



does not relinquish its normative force; rather, it relies on verifiable technical standards to render its requirements operational, thereby producing a structural integration of legal norms and technical mechanisms.

This regulatory architecture is further reinforced by a model of distributed allocation of obligations and responsibilities, under which AI systems are not holders of legal duties. Instead, regulatory burdens are assigned to providers, deployers, importers, distributors and other relevant actors according to their role in the AI system lifecycle. This framework is consistent with our proposal, according to which legal responsibility for the effects produced by the cybersubject must be borne by the human and institutional actors involved in its design, implementation and control, thus avoiding both structural irresponsibility and the fictional attribution of responsibility to the technology itself (Banchio, 2024b).

Moreover, the AI Act explicitly incorporates the protection of fundamental rights as the axiological core of AI regulation, translating principles such as human dignity, equality, non-discrimination and effective judicial protection into binding legal obligations. This process of transforming ethical principles into enforceable legal standards finds a robust theoretical foundation in concept of *Algoethics*, which conceives ethics not as a set of voluntary guidelines or external soft law, but as a normative component internalized within the design and functioning of algorithmic systems (Banchio, 2024a; 2024c). In this way, ethical considerations are rendered legally enforceable through concrete technical requirements, including data quality standards, bias mitigation measures and prohibitions of certain AI practices.

The requirement of meaningful human oversight constitutes another significant point of convergence between the AI Act and the cybersubject theory. Far from being a merely declaratory principle, human oversight is configured as a binding legal obligation with technical, organizational and training dimensions, requiring the genuine capacity to understand system capabilities and limitations, to intervene in system outputs and, where necessary, to override or correct them. In this respect, legal control is exercised through technically enabled human capacities, reinforcing the hybrid character of the regulatory model without undermining the centrality of law (Banchio, 2024c).

Finally, both the AI Act and the cybersubject theory reveal a partial shift in the enforcement of law towards digital regulatory infrastructures, such as registries, databases, conformity assessment procedures and continuous post-market monitoring systems. These infrastructures do not replace traditional mechanisms of legal control, but rather complement them, enabling anticipatory and ongoing



algorithmic governance. Within this framework, hybrid regulation should not be understood as a dilution of law into technology, but as the “juridification” of technology in the service of the effective protection of fundamental rights and the rule of law in the context of contemporary digital constitutionalism.

I therefore conclude by noting that the theory of the cybersubject provides a useful conceptual framework for understanding and grounding the European approach—an approach that neither personifies artificial intelligence nor reduces it to a mere object but instead integrates it into the legal system as a technically active and legally relevant reality. Thank you very much.

Referencias / References

Banchio, Pablo (2024a). *La teoría del cibernsujeto y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act)*. Zenodo. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15127855>

Banchio, Pablo (2024b). *Algorética*. Zenodo. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12806322>

Banchio, Pablo (2024c). *Hacia una ontología jurídica del cibernsujeto en el marco del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial*. *Amicus Curiae*, 10, 15–18. Disponible en: <https://amicuscuriaequorum.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/07/volume-10-2024.pdf>